

# DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

BOLETIN BIMESTRAL - Año 1 - DICIEMBRE 31- 2003

2

**Proyecto "RELACIONES CIVIL - MILITARES" PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR  
FUNDACION: DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA**

## ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA MILITAR EN EL ECUADOR

La historia institucional del Ecuador ha mostrado verdaderas paradojas en la construcción de los entramados normativos que rigen su vida social y política. Los esfuerzos emprendidos por los escasos proyectos modernizadores con carácter institucionalista y civilista en nuestra vida republicana desde 1830 (entre los que destacan, con distinto signo ideológico, los impulsados por García Moreno; la Revolución Liberal, y alguno que otro contemporáneo) quedaron sofocados por sucesivos y oportunistas golpes de mano, por incomprensión de las ideas republicanas, por traición o acomodados, según los casos. En los últimos cincuenta años resalta la escasez de estrategias políticas civiles de construcción del Estado.

A falta de la política le suplió la fuerza. Las sucesivas dictaduras y autoritarismos favorecieron, a punta de decretos supremos, la penetración de las perspectivas corporativistas en las formaciones institucionales. Las dictaduras militares de los 60" y 70" se empeñaron en construir un orden jurídico desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, provocando una verdadera desarticulación del Estado. Importantes espacios de nuestra estructura constitucional y legal acusan esas influencias que los 25 años de vida democrática no han podido superar y son la base de la inestabilidad política. El mandato constitucional de 1998, proclama la Unidad jurisdiccional del Estado, pese a ello las justicias militar y policial continúan funcionando de manera autónoma, lo que contradice el principio constitucional de subordinación de las fuerzas militares y de seguridad al orden civil y constituyen un grave escollo para sus propios y específicos procesos de profesionalización.

En el Congreso se encuentran dos proyectos de Ley Orgánica de la Función Judicial. Uno presentado por la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional, que fue obstaculizado por otro proyecto enviado por la Corte Suprema de Justicia. La Constitución vigente eliminó el control político (del Congreso) sobre la Corte Suprema de Justicia, en favor del control que debe ejercer el Consejo de la Judicatura. Pero este organismo ha sido neutralizado en los hechos al ser presidido por el Presidente de la Corte Suprema, perdiendo su carácter sustancial de ente superior de control de los actos de los magistrados de la Corte Suprema. Mientras tanto, el principio de que todo funcionario público tiene que rendir cuentas ante alguien no se cumple lamentablemente ni en éste ni en otros campos de acción institucional del Estado.

Con el objeto de promover una discusión al respecto, este número ( 2) del Boletín "DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA" está dedicado a la reflexión de distintos aspectos de esta problemática. Los artículos y reflexiones que se ofrecen aquí son producto de los foros promovidos por el Proyecto Relaciones Civil-Militares PUCE durante el año 2003, y recoge las ideas de distinguidos analistas del tema.

## CONTENIDO

Editorial:

Estado de Derecho y Justicia Militar en el Ecuador.

**Pág. 1**

¿Qué significa la Unidad Jurisdiccional del Estado?

Ernesto Albán Gómez

**Pág. 2**

La Jurisdicción Penal Militar

Fernando Martínez de la Vega

**Pág. 3**

Apuntes al Proyecto de Código de Justicia Militar presentado por el Ministerio de Defensa al Congreso Nacional

Alejandro Ponce

**Pág. 4**

¿Pueden los militares ser jueces de sus propias causas?

Juan Carlos Andrade

**Pág. 5**

Ecos de la Justicia Militar

**Pág. 6**

Cronología FFAA - Sociedad

José Castro Sotomayor

**Pág. 6**

OPINIÓN PUBLICA

**Pág. 8**

# ¿QUÉ SIGNIFICA LA UNIDAD JURISDICCIONAL DEL ESTADO?

**Ernesto Albán Gómez \***

La expresión “unidad jurisdiccional” apareció por primera vez en nuestro sistema constitucional en las reformas de 1983. Sin embargo, esas reformas no explicaron qué debería entenderse por unidad jurisdiccional y, de hecho, desde 1983 en adelante esta norma no tuvo ninguna aplicación en ninguna ley secundaria. En 1996, una nueva reforma constitucional precisó un poco más el alcance de lo que se debería entender por unidad jurisdiccional, pues señaló que significa la potestad judicial que corresponde exclusivamente a los magistrados jueces y tribunales establecidos por la Constitución y la ley. Sin duda con ello se precisó un tanto más el alcance de lo que debería entenderse como unidad jurisdiccional.

Pero hay que llegar a las reformas de 1998 y al actual artículo 191 de la Constitución para comprender lo que en definitiva debe entenderse por unidad jurisdiccional. Significa que todos los órganos unipersonales o pluripersonales que administran justicia, es decir magistrados, jueces y tribunales, deben estar dentro de la Función Judicial. Este es su sentido fundamental.

El artículo 191 de la Constitución se complementa con la disposición transitoria vigésimo sexta que dice: “Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a sus propias leyes orgánicas. Esta disposición incluye a los jueces militares, de policía y de menores. Si otros funcionarios públicos tuvieran entre sus facultades la de administrar justicia en determinada materia, la perderán, y se la trasladará a los órganos correspondientes de la Función Judicial. El Consejo Nacional de la Judicatura presentará al Congreso Nacional los proyectos que modifiquen las leyes pertinentes, para que estas disposiciones puedan cumplirse. El personal administrativo que actualmente labora en las cortes, tribunales y juzgados militares, de policía y de menores, cuya estabilidad se garantiza, pasará a formar parte de la Función Judicial. Los bienes y el presupuesto de esas dependencias se transferirán igualmente a la Función Judicial.”

De hecho, de los tres casos que aquí se señalan de una manera expresa: jueces militares, de policía y de menores, sólo los jueces de menores han pasado ya a la Función Judicial, en virtud de la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia, que esta vigente en el país. Respecto a los jueces militares y los jueces policiales existe un proyecto presentado por el Consejo Nacional de la Judicatura, que aplicando la norma constitucional, establece

como principio que estos jueces también pasen a la Función Judicial. Creo que, las normas constitucionales son bastante claras y no hay cómo perderse en cuanto al sentido que tiene la unidad jurisdiccional: todo órgano que administre justicia debe estar dentro de la Función Judicial. Puede discutirse si esta disposición es buena o no, si debe o no reformarse la Constitución, pero creo que el sentido de la norma constitucional es bastante claro. Los jueces y magistrados que pasen a la Función Judicial, en definitiva deben acomodarse, ceñirse a los principios que rigen a la Función Judicial, y que están establecidos en el mismo título de la propia Constitución.

Quizá hay que remontarse al viejo Montesquieu para establecer la división de poderes o de funciones del estado. Cuando el Estado dejó de ser absolutista para convertirse en un estado en el que el poder se distribuía entre varios órganos, se determinó claramente que cada una de estas funciones del estado, de estos órganos del estado, tenían potestades y funciones específicas. Una es la función y la potestad del legislativo, otra la del ejecutivo y otra la de la Función Judicial.

La potestad de la Función Judicial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado como dice el Art. 1 del Código de Procedimiento Civil; y desde un punto de vista social su razón de ser es permitir el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia. Esa es la función, la tarea, la potestad de la Función Judicial y ningún otro órgano del estado puede intervenir en esas decisiones judiciales. Este principio fundamental, que se conoce con el nombre de independencia de la Función Judicial es el sustento de un estado democrático.

Ningún otro órgano del estado pueda intervenir en las decisiones de los jueces, según lo señala nuestra Constitución en el artículo 199, que textualmente dice: “Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos. Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional aun frente a los demás órganos de la Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley.” Esto es lo que doctrinariamente corresponde a la independencia externa e independencia interna. Que los jueces militares y policiales se integren a la Función Judicial no implica un desconocimiento del fuero, ni por lo tanto, podría haber en ello un riesgo de inconstitucionalidad. Hay que respetar el fuero porque la Constitución lo manda.

El fuero exige especialización de los jueces, pero existe solamente cuando los actos considerados delitos se han cometido en la ejecución de las labores profesionales. En este sentido es fundamental que los códigos penales militar y policial se actualicen y se pongan en consonancia con las necesidades de la sociedad actual. Esos códigos están muy atrasados frente a la nueva concepción de lo que deber ser el delito militar, el delito policial; y ahí esta quizá el problema más serio. Hay que admitir que la unidad jurisdiccional no es simplemente un traslado formal de unos jueces desde un ámbito del poder público a otro ámbito del poder público; signifi-

ca fundamentalmente que la justicia militar tiene que acomodarse plenamente a los principios constitucionales.

**\* Doctor en Jurisprudencia. Abogado. Ex Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El artículo está tomado de la ponencia del autor presentada en la Mesa Num. 4 "Unidad Jurisdiccional y Legislación Militar", Foro: "Orden Jurídico, Defensa y Seguridad". Quito, PUCE- USFQ, junio 9 y 10 de 2003.**

# LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR

**Fernando Martínez de la Vega \***

La legislación militar ecuatoriana, tiene sus orígenes en la Roma conquistadora y civilizadora. Cuando Roma conquista la península Ibérica, impone en ella sus leyes y penas militares, las que se mantuvieron por mucho tiempo en España. Con las modificaciones del caso, esos cuerpos legales quedaron consignados en los códigos militares de muchas de las naciones europeas, de los Estados Unidos de América y de las repúblicas de Hispanoamérica.

En el Ecuador, la primera Carta Fundamental, de 23 de Septiembre de 1830, mantuvo esos principios. En el Art. 51 se dice que "Los individuos del Ejército y la Armada están sujetos en sus juicios a sus peculiares ordenanzas". En 1831, el Congreso dictó la primera Ley Orgánica Militar y estableció un Estado Mayor General, Estados Mayores Departamentales y Comandancias de Arma.

El primer Código Militar fue aprobado y sancionado en 1870 por el Presidente Gabriel García Moreno. En la Asamblea Constituyente de 1897, se sentaron los preceptos fundamentales siguientes: "Se garantiza la igualdad ante la ley, en virtud de la cual no se reconoce fuero alguno para el juzgamiento de las infracciones comunes. Nadie puede ser puesto fuera de la protección de la leyes, distraído de sus jueces naturales, ni juzgado por comisiones especiales", preceptos que también quedaron consagrados en la Constitución de 1907. En 1918 se presenta al Ministerio de Guerra y Marina, el "Proyecto de Código de Procedimiento en Materia Criminal Militar", el que sería uno de los primeros que trataban de normar las leyes militares y ponerlas acordes con otras leyes del Estado y de la Carta Fundamental.

En 1924, cuando el Congreso Nacional entrega al Ministerio de Guerra, el mando y la administración del Ejército y la Armada, la sección Justicia Militar queda incorporada a dicho Ministerio, como Dirección de Justicia Militar. En 1954 se expide la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Algún tiempo después se dispone que la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia se constituya en el máximo organismo de justicia militar, situación que se mantuvo hasta Diciembre 1972, cuando, con Decreto Supremo No. 1444, publicado en el Registro Oficial No. 208, del mismo mes y año, se reestructura la Corte de Justicia Militar, organizándola de la forma en la cual está constituida en los actuales momentos. En Agosto de 1961 se expide el Código Penal Militar, vigente hasta la fecha.

Según el Art. 71, de la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, "La organización, integración, funcionamiento, atribuciones y deberes de los organismos de la administración de justicia militar, se determinan en la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas, en el Código de Procedimiento Penal Militar y más leyes y reglamentos vigentes".

El ejercicio de la acción penal militar está regulada por:

- a) La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas;
- b) La Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las Fuerzas Armadas;
- c) El Código Penal Militar;
- d) El Código de Procedimiento Penal Militar y,
- e) El Código de Procedimiento Penal Común, como Ley Supletoria.

Los Ministros Jueces Militares y el Ministro Fiscal, son nombrados por Decreto Ejecutivo, a pedido del Ministro de Defensa Nacional, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. La Corte de Justicia Militar tiene jurisdicción nacional, y entre sus atribuciones está:

- a) Conocer y Juzgar en segunda instancia, las causas penales elevadas en virtud de los recursos de apelación, nulidad y revisión, o en consulta, de las sentencias dictadas por el inferior.
- b) Conocer y resolver las causas que en consulta fueren elevadas por el Tribunal de primera instancia, con los autos de llamamiento a juicio plenario o de sobreesimiento.
- c) Dirimir la competencia entablada entre jueces militares y entre éstos y los jueces comunes.

El Art. 191 de la Constitución, vigente desde el 10 de Agosto de 1998, establece que, "El ejercicio de la potestad judicial, corresponderá a los órganos de la Función Judicial. Se establecerá la Unidad Jurisdiccional". Con relación a esta disposición, la Vigésimo Sexta Disposición Transitoria de la misma Constitución dispone que, "Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la Función Judicial ..." sin embargo, continúa, "... y mientras las leyes no dispongan algo distinto, (los magistrados y jueces militares) se someterán a sus propias Leyes Orgánicas". Esta misma disposición transitoria dispone que, "El Consejo Nacional de la Judicatura presentará al Congreso Nacional, los proyectos que modifiquen las leyes pertinentes, para que estas disposiciones puedan cumplirse"; por lo tanto, hasta que no se reformen o modifiquen las actuales leyes, lo dispuesto en el Art. 191 de la Constitución no puede cumplirse.

Con el afán de contribuir para el logro de la Unidad Jurisdiccional, el mando militar dispuso que se elabore un proyecto de Código de Justicia Militar, que reemplace al actual, vigente desde 1961, el mismo que una vez concluido, fue remitido por el Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional, el 11 de Octubre de 2001, con oficio No. T1542-DAJ-2001-4442.

**\* General ® FAE. Presidente de la Corte Superior de Justicia Militar.**

# APUNTES AL PROYECTO DE CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA AL CONGRESO NACIONAL.

Alejandro Ponce \*

Desde el año pasado cuando se iniciaron las “Clínicas Jurídicas en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito”, nos propusimos como objetivo fundamental que nuestro trabajo esté dirigido al reestablecimiento del Estado de Derecho en el Ecuador, a forzar a que el país se dirija al cambio establecido por la Constitución del año 98.

Uno de los proyectos -a la luz de la Constitución- tiene que ver con una de las exigencias de la Nueva Constitución, esto es, que el Estado sea efectivamente un Estado Social de Derecho. Así nos propusimos realizar un diagnóstico de varios cuerpos legales que conciernen al campo militar. Primero comenzamos con la Ley Orgánica del Servicio de Justicia Militar; el Código de Procedimiento Penal Militar; la Ley de Servicio Militar Obligatorio; y el Proyecto del Código de Justicia Militar que ha sido presentado ante el Congreso, por la Presidencia de la República.

Hasta este momento hemos hecho un mapa de los problemas que presentan cada una de estas leyes, señalando tres categorías específicas: la primera, si la ley o la norma específica está conforme a la Constitución; luego de eso, si la norma, pese a estar de conformidad con la Constitución, resulta jurídicamente adecuada; y la tercera opción es si la norma es jurídicamente correcta.

Luego de realizar este análisis, nos hemos encontrado con cuerpos legales que, en principio, deberían ser derogados íntegramente, porque la concepción misma del cuerpo legal es contraria a la Constitución. Luego hemos encontrado otros que requieren una sustancial reforma, y que será de discusión: si necesitamos una nueva ley o simplemente requieren una reforma; y finalmente otros en los que simplemente requiere reformas puntuales (entre estos se encuentra por ejemplo la Ley de Servicio Militar Obligatorio).

Entre los primeros, encontramos que el Código Penal Militar, que fue codificado en 1961, pero que es bastante más antiguo, realmente no responde a las necesidades que nuestra constitución nos impone y requeriría cambiar. El Proyecto de Código de Justicia Militar presentado por la Judicatura es adecuado y viene a transformar o eliminar el Código Penal Militar.

Eso nos lleva a una segunda categoría, de aquellos que requieren una sustancial reforma. Si se revisa el Código de Justicia Militar que ha sido presentado por el Presidente de la República, con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, se ve que lo único que se ha hecho es traspasar las normas que están en la Ley Orgánica del Servicio de Justicia de las FFAA y en el Código de Procedimiento Penal Militar, en este código nuevo, dándole adaptaciones que son meramente formales, pero no de fondo, a las necesidades impuestas por la Constitución.

Así por ejemplo, se mantiene que los jueces militares siguen siendo parte o miembros activos de las FFAA, lo cual rompería el prin-

cipio de Unidad Jurisdiccional y los estándares previstos por los instrumentos internacionales relativos a la independencia.

Se vuelve a cometer viejos errores. Por ejemplo no se determinan con claridad cuáles constituyen delitos militares y cuáles no lo son propiamente dichos. Uno de los elementos, que se deben discutir en este punto, es que delito militar sea únicamente aquel en el que el sujeto activo sea un militar y el sujeto pasivo sean las FFAA. Delitos como el de desertión, que sólo puede ser cometido por un militar en servicio activo, y el perjudicado en definitiva es la institución militar. Pero hablar de violación, homicidio o asesinato, son delitos claramente comunes porque el sujeto activo, siendo militar o no, no afecta a la institución militar como tal, sino claramente a un bien jurídico individual.

De igual manera, existen problemas con respecto al procedimiento, al establecer y romper el principio constitucional de unidad del ministerio público, puesto que se crea un ministerio público o un ministerio fiscal exclusivamente militar. Esto rompe el principio de unidad -como dije antes- previsto en la Constitución y resulta mucho más adecuado, desde el punto de vista orgánico, el que evitemos la dispersión normativa. Debemos tratar de concentrar los cuerpos normativos para que exista un absoluto entendimiento del ordenamiento jurídico como un solo cuerpo y no como cuerpos aislados. En ese sentido, una de nuestras recomendaciones sería que todo el tema de procedimiento en lo penal militar, que requiere necesariamente de una especialidad, se lo incluya dentro del propio código del procedimiento penal ordinario (digámoslo así), como un libro independiente, que va a requerir, como requiere materias vinculadas al juzgamiento dentro de los fueros (que está previsto en nuestro código), o de ciertos delitos, como son los delitos de acción privada o los delitos que se cometen por los medios de comunicación, que requieren de un tratamiento especial, pero que no requieren de una separación como cuerpo normativo. Esto, en nuestro criterio contribuiría enormemente a someter todo el ordenamiento militar al poder de la Constitución.

Evidentemente, tenemos que entender que estos problemas no se solucionan con la simple introducción de normas legales - uno de los graves errores que tenemos los ecuatorianos, es creer que la ley va a transformar la realidad social. Mientras no entendamos al derecho como un instrumento de satisfacción de necesidades sociales, no vamos realmente a lograr transformar la vida diaria del derecho.

\* Dr. En Jurisprudencia PUCE. LL.M Estudios Legales Internacionales (Protección Internacional de los Derechos Humanos), Washington College of Law, American University, Was. DC. Abogado. Profesor del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. El artículo es parte de la intervención del autor en el Seminario Taller “Unidad Jurisdiccional y Legislación Militar”, Congreso Nacional-PUCE Quito, Noviembre 26 de 2003.

# ¿PUEDEN LOS MILITARES SER JUECES DE SUS PROPIAS CAUSAS?

Juan Carlos Andrade \*.

El artículo 191 de la Constitución Política de la República vigente desde el 10 de agosto de 1998 establece como principio básico la unidad jurisdiccional. La vigésimo sexta disposición transitoria dispone que “todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la Función Judicial.... Esta disposición incluye a los jueces militares, de policía y de menores”. Estas disposiciones constitucionales deben servir de marco de referencia para cualquier reforma a la administración de justicia militar y de policía, ya que necesariamente los jueces que se encarguen de ventilar las causas militares y policiales deben ser jueces que pertenezcan a la Función Judicial y no como en la actualidad sucede, que éstos jueces son parte de las fuerzas militares y de policía.

La pertenencia de los Jueces a la Función Judicial no contradice la necesidad de especialización de los jueces militares y policiales que muchas veces ha sido argumentada para oponerse a la reforma. Dentro de la Función Judicial es necesario que se creen jueces especializados en la materia militar o policial, que tengan un profundo conocimiento de las leyes militares y policiales a fin de que las apliquen con imparcialidad, respetando los derechos de los ciudadanos que sirven en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.

Teniendo como parámetro las disposiciones constitucionales citadas debemos analizar el proyecto presentado en 2001 por las FFAA para reformar las leyes que los rigen y establecer los juzgados militares. Hay que rescatar que en dicho proyecto se ha tenido mucho cuidado en establecer la especialización de los jueces en materias militares, pero se debe anotar que el proyecto confunde especialización con pertenencia. Los jueces militares y policiales, como ya se ha anotado, deben obligatoriamente ser parte de la Función Judicial y, necesariamente, “serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional aún frente a los demás órganos de la Función Judicial” (artículo 199 inciso segundo, Constitución Política de la República). Como garantía de la independencia de jueces y magistrados, la propia Constitución reconoce y garantiza la carrera judicial (artículo 204), reconocimiento que tiene por finalidad sustraer tanto a jueces como a magistrados de influencias externas que en ciertos casos puedan llevar a que éstos fallen por consideraciones ajenas a los procesos que sustancian.

No es dable, por consiguiente, que se pretenda que los jueces y tribunales militares o policiales continúen dependiendo jerárquicamente de las Fuerzas Armadas o de la Policía, ya que esto contraría las normas constitucionales a las que se ha hecho referencia. Es claro que la pertenencia a un cuerpo colegiado jerárquicamente organizado como son las FFAA o las fuerzas policiales, muy difícilmente va a garantizar la independencia de los jueces; sin ella, difícilmente podemos esperar que exista una adecuada administración de justicia.

Las Fuerzas Armadas han hecho reparos al Proyecto elaborado por el Consejo Nacional de la Judicatura porque en él se ha establecido que los jueces no serán oficiales incorporados a la fuerza, sino

que, respetando lo dispuesto por la Constitución, dicho proyecto ha establecido que los jueces deban ser parte de la Función Judicial. Estamos de acuerdo en que los jueces que juzguen las causas militares y policiales deben ser especialistas en el tema militar o policial, es decir, deben tener conocimientos de las leyes y de las particulares realidades que viven sus miembros. Perfectamente un Juez que forme parte de la Función Judicial puede ser un especialista en estos temas; de hecho existen jueces especializados en diversas materias, civiles, mercantiles, menores, penales., de trabajo, de inquilinato, etc. Los estamentos militares deben aceptar que los jueces que los juzguen sean jueces que pertenezcan a la Función Judicial. La pertenencia a esta Función hará que la posibilidad de que existan presiones disminuya, lo que asegurará una mejor administración de justicia, ya que los jueces podrán actuar con imparcialidad e independencia.

Por otra parte, no sólo parece adecuado que existan jueces militares y policiales especializados que se hayan sustraído de sus respectivas fuerzas, sino que también es necesario que el Ministerio Fiscal que se encargue de la investigación de las infracciones militares y policiales. Al igual que en el caso de los jueces, los fiscales deberán tener los conocimientos necesarios en las materias militares y policiales. Hay que reiterar la necesidad imperiosa de que existan jueces y fiscales especializados, a los que se debe asegurar en forma adecuada su independencia para evitar presiones de cualquier tipo.

Pero no sólo se debe trabajar para que los jueces y los fiscales sean independientes, es necesario que los procesos sean efectivamente un medio para la realización de la justicia. Para ello se debe buscar que los procesos sean ágiles y que el juez de la causa participe en forma activa en el desarrollo del proceso, a fin de que al momento de dictar sentencia tenga un adecuado conocimiento del caso. Pero, además, es necesario que los jueces y fiscales, de ser el caso, tenga las suficientes atribuciones a fin de poder llevar a cabo las diligencias que se requieran realizar en cada uno de los casos que se encuentran en su conocimiento.

Un gran problema que se puede presentar sobre todo en el ámbito penal, es que la justicia sea obstruida, que las pruebas se destruyan y que no se permita el acceso a documentos y a testimonios que lleven a esclarecer en forma adecuada los hechos. Muchas veces en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, por un mal entendido espíritu de cuerpo, se encubre a los autores de infracciones o se obstruye las investigaciones. Se debe dotar a jueces y fiscales de mecanismos de coerción que les permita sancionar de forma efectiva a los responsables de estas faltas, que no hacen ningún bien a las instituciones a las que pertenecen, sino que por el contrario, lo único que les hace es daño, ya que pierden credibilidad y prestigio.

**\* Doctor en Jurisprudencia. Abogado. Profesor del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ y de la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar. El artículo está tomado del comentario del autor en la Mesa Num. 4 “Unidad Jurisdiccional y Legislación Militar”, Foro: “Orden Jurídico, Defensa y Seguridad”. Quito, PUCE- USFQ, junio 9 y 10 de 2003.**



# ECOS DE LA JUSTICIA MILITAR

∞ La actual estructura de la justicia militar se mantiene desde diciembre 1972, a partir del Decreto Supremo No. 1444, publicado en el Registro Oficial No. 208 que reestructuró la Corte de Justicia Militar. Previamente, en agosto de 1961 se había expedido el Código Penal Militar, vigente hasta la fecha.

∞ Aun en la actualidad, ha sido el mando militar el que dispuso que se elabore un proyecto de Código de Justicia Militar, que reemplace al actual, vigente desde 1961. El proyecto fue remitido por el Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional, el 11 de Octubre de 2001, con oficio No. T1542-DAJ-2001-4442.

∞ La Constitución de 1998 contempla en el Art. 191, la Unidad Jurisdiccional del Estado y dispone que "El Consejo Nacional de la Judicatura presente al Congreso Nacional, los proyectos que modifiquen las leyes pertinentes, para que estas disposiciones puedan cumplirse".

∞ En la práctica, hasta la presente fecha no se ha materializado la unidad jurisdiccional en el ámbito militar. Esto ha significado que las justicias militar y policial continúen funcionando sin tener órganos superiores a los cuales responder por sus resoluciones. En cuanto a la aplicación de la ley, continúan administrando justicia Oficiales Generales en servicio pasivo que no tienen formación profesional en el campo del derecho. Hay que observar que por mandato constitucional el Código de Procedimiento Penal común es supletorio del Código de Procedimiento Penal Militar. Pese a ello la Corte de Justicia Militar viene inadmitiendo el recurso de casación (control) ante una de las salas de lo penal, de la Corte Suprema de Justicia.

∞ Sin embargo, otros espacios jurisdiccionales como el de menores sí han sido incorporados a la jurisdicción nacional al expedirse el nuevo Código de Menores.

∞ Un problema que se desprende de la Constitución vigente es que ésta eliminó el control político sobre la Corte Suprema de Justicia. En su caso sería el Consejo de la Judicatura el que controle a los ministros de dicho tribunal. En principio todo funcionario público debe rendir cuentas ante alguien. Pero conflictos de intereses entre el Consejo de Judicatura y la Corte Suprema ha producido un grave vacío sobre este control.

∞ DICTAMEN DE LA CORTE DE JUSTICIA MILITAR EN EL CASO DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS DE AERONAVES DE LAS FUERZAS ARMADAS. El 17 de diciembre de 2003 el presidente de la Corte de Justicia Militar, General Fernando Martínez de la Vega dictó el fallo de nulidad sobre este caso en el que estaban implicados los Generales: ROBERTO MOYA, MARCELO MOSCOSO Y VICEALMIRANTE EDGAR GUERRA.

∞ Según el Juez Militar los acusados cometieron "abandono de destino", previsto en el Código Penal, como delito. Sin embargo, luego de que los acusados han sido llamados a juicio plenario, el Presidente de la Corte Militar, en el auto de nulidad de la causa aduce que para que haya delito "debieron haberse ausentado más de seis días". Puesto que "tan solo se han ausentado cinco", no hay delito sino falta disciplinaria. Además, dado que se ha iniciado el juicio luego de los sesenta días que el Reglamento de Disciplina Militar establece como plazo para que prescriba la acción disciplinaria, ya no se puede ni siquiera castigar disciplinariamente. Por ello declara la nulidad de la causa y manda archivar el proceso.

∞ Como antecedente hay que tomar en cuenta que el Informe de la COMISIÓN DE CONTROL CÍVICO DE LA CORRUPCIÓN sobre la contratación de reaseguros y seguros de las Aeronaves de las Fuerzas Armadas, calificó este caso como "delito de Concusión" y el informe de la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal, pues se habrían cometido infracciones tipificadas en los Códigos Penal Común y Código Penal Militar (que no es otro que el de peculado). Según la Constitución los dos, peculado y concusión, constituyen crímenes que no admiten fianza, que son imprescriptibles y que pueden tramitarse aún en ausencia de los procesados.

∞ CONSEJO DE GUERRA. El 3 de diciembre de 2003 el Consejo de Guerra de Oficiales Superiores de la Fuerza Terrestre dictó sentencia en primera instancia en contra del Suboficial CARLOS SEAS y los Sargentos JULIO ESCOBAR y ADRIANO CALDERON (acusados por tráfico ilícito de armas) condenándoles a 8 y 7 años de reclusión en una cárcel pública, con expulsión de las Fuerzas Armadas y pérdida de todos sus derechos económicos (cesantía, pensión de retiro y eventualmente el montepío que podrían generar en caso de muerte, a favor de sus familiares. De esta sentencia se han interpuesto los recursos de nulidad y apelación ante la Corte de Justicia Militar.

## CRONOLOGIA FUERZAS ARMADAS - SOCIEDAD

### RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LAS FFAA A LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

• En respuesta a los denuncias de corrupción contra las FFAA el Presidente Gutiérrez, con la aceptación del Ministro de Defensa, creó una Comisión de Transparencia para investigar la desaparición de armamento de bodegas militares (Hoy 24/09/03), La medida mereció la adhesión de la ciudadanía (El Comercio 01/10/03)

• El informe sobre la explosión del Polvorín (bodega de armamento militar) ocurrida el 20 de noviembre del 2002 en la Brigada Galápagos de Riobamba determinó que no existieron medidas de seguridad en la repotenciación de las municiones (granadas) por parte de la Fábrica Santa Bárbara (El Comercio 09/10/03). El caso es analizado en la Corte de Justicia de Chimborazo. La Fuerza Terrestre aseguró que 640 granadas pertenecientes a la Brigadas Galápagos, y que quedaron afectadas

luego de la explosión, serían destruidas (Hoy 06/11/03).

• El tema del tráfico de armas hacia Colombia desde las bodegas militares llegó a su punto más alto con el descubrimiento en Quito de una bodega clandestina de armas, de las cuales el 10 % pertenecían al Ejército (El Comercio 28/08/03). El 12 de septiembre terminó la auditoria del armamento de las FFAA desde 1998 hasta el 11 de septiembre del presente año, que evidenció la pérdida de armas y municiones (El Comercio 19/10/03). En las Cortes Militares de Justicia se ventilan cinco casos por robo de armas, todos vinculados con el comercio ilegal hacia los grupos irregulares colombianos. La legislación militar ecuatoriana establece la cadena perpetua por delitos graves, como la traición a la Patria (sentencia que no existe en la justicia común) (El Comercio 26/10/03).

- Tres militares apresados por el tráfico de armas (El Comercio 24/10/03) fueron juzgados por el Consejo de Guerra: el suboficial Carlos Seas fue sentenciado a 8 años de prisión de reclusión menor; y los sargentos Julio Briones y Adriano Calderón a siete años, perdiendo sus derechos militares. La sentencia no incluyó a oficiales pese a que son ellos los responsables de las unidades (El Comercio 10/12/03).

- La Comisión de Transparencia creada para investigar el tráfico de armas no cuenta con independencia para cumplir su objetivo. Trabajan con infraestructura militar y edecanes militares que sirven de lazo entre las ramas de las FFAA, esto según el vocero del Ministerio de Defensa (El Comercio 12/11/03). El hermetismo de la institución armada, como señala Cesar Montúfar, es causa de desgaste de las FFAA. La transparencia en la información despejaría especulaciones sobre FFAA, que, como cualquier otra institución del Estado, son sujetos de control (El Comercio 15/10/03).

## ACCIONES FRONTERA NORTE

- El canciller Patricio Zuquilanda anunció la suspensión de las fumigaciones en la frontera por parte del gobierno colombiano (Hoy 01/10/03). El departamento de Genética de la Universidad Católica de Quito presentó un estudio que prueba que 12 mujeres colombianas y 10 ecuatorianas, habitantes de las riveras del río San Miguel en la frontera colombo-ecuatoriana, presentan daño genético en el 36 % de sus células. Glen Warren, de la embajada de EEUU, ratificó que el glifosato, químico utilizado por la compañía Dyncorp, "no es peligroso". La demanda presentada contra la compañía estadounidense intenta obligarla a pagar una indemnización por los daños (El Comercio 11/11/03).

- La ayuda y presencia de EEUU para el fortalecimiento de las acciones militares y policiales en la frontera norte ha sido constante. \$15 752 990, no reembolsables, se destinarán a la dotación de vehículos, armas y equipo de comunicación para la Policía y las FFAA. (Hoy 01/10/03); la visita del general Wendell Griffin, del Comando Sur de las EEUU (Hoy 20/10/03) y de oficiales de alto rango del ejército de EEUU a las instalaciones del FOL (Puesto Avanzado de Operaciones instalado en la Base de Manta desde el 2 de junio del 2000) (El Comercio 25/10/03), no fue indiferente a la opinión pública. El FOL es una de las siete oficinas que EEUU tiene en Ecuador para combatir el narcotráfico desde la implantación del Plan Colombia en el 2001 (El Comercio 23/10/03).

- Parte de esa ayuda era la propuesta de construir centros de acopio para la Defensa Civil por parte del Comando Sur de EEUU, en las provincias de Sucumbios, Azuay y Guayas, con el objetivo de estar preparados para cualquier desastre natural (El Comercio 15/10/03). Freddy Rivera, FLACSO; dice que el objetivo oculto de este tipo de apoyo es "policializar las acciones contra el narcotráfico y el terrorismo" (El Comercio 23/10/03). En la situación actual, Ecuador es víctima de la "larga batalla", porque pierde seguridad, tranquilidad, neutralidad e independencia. (Hoy 20/10/03).

- El convenio para la construcción de los centros de acopio no fue aceptado por el Congreso Nacional (Hoy 23/10/03). La instalación de los centros en Guayas, Azuay y Sucumbios, que implica una inversión de \$950 mil (Hoy 02/11/03) entró a análisis en el Congreso, pero antes de emitir algún informe, el canciller (e) de EEUU, Edwin Jonhson, dio por terminado el Acuerdo de Asistencia Humanitaria. Jonson dijo que "el Ministerio de RR.EE. considera necesario contribuir a la preservación de la unidad nacional", por eso dimitieron el Acuerdo y evitaron que vaya al

Tribunal Constitucional. Esa decisión la tomó el canciller Zuquilanda luego de hablar con el presidente Gutiérrez y la Defensa Civil, esta última habría sido la encargada de administrar los centros (El Comercio 15/11/03).

- El Ejército fortaleció la presencia militar en la zona fronteriza con Colombia. 800 uniformados patrullarán el noroccidente de la provincia del Carchi, donde existe gran cantidad de pasos clandestinos que conectan con poblados colombianos (Hoy 21/10/03); los recorridos en los poblados fronterizos y la montaña cercana al afluente del San Miguel, se refuerzan. Los patrullajes han decomisado gasolina blanca, municiones, explosivos, cocaína, y han detenido a varias personas acusadas de insurgentes (El Comercio 23/11/03), y han descubierto viveros de coca en la zona (El Comercio 05/10/03).

- El gobierno colombiano comunicó que en noviembre se iniciarán tareas militares conjuntas en la frontera con Ecuador. Ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería ecuatoriana hicieron pronunciamientos (Hoy 21/10/03). René Vargas, ex jefe del Ejército señaló que "iniciar acciones conjuntas significaría involucrar directamente al Ecuador en el conflicto".

El ex Ministro de Defensa, Cesar Durán, señaló que "un batallón mixto no podría darse, pues nuestra misión es cuidar la frontera y no ir en contra de la guerrilla" (Hoy 25/11/03); criterio que coincidiría con la opinión vertida por el Secretario de la ONU, Kofi Annan, en su visita a Ecuador, al manifestar que la solución del conflicto colombiano "debe ser pacífica y no militar" (Hoy 11/11/03).

Andrés Vallejo (ID) pregunta si las FFAA ecuatorianas están preparadas para ser el muro de contención de la gente, guerrilleros o no, que se movilizan a causa de estas dos acciones? ¿Se habrá convertido la guerra colombiana en nuestra? (Hoy 07/10/03)

## FUERZA MULTINACIONAL

- La reunión de Ministros de Defensa en la que participaron Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Colombia, sirvió para establecer 'coincidencias estratégicas' de la región en temas de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo (El Comercio 07/10/03). Dentro de esta dinámica, los sextos ejercicios de la Fuerza Multinacional de la Paz de la ONU se realizarán en Ecuador. El coronel Guillermo Vélez manifestó que la presencia de los cascos azules no tienen nada que ver con el Plan Colombia. (El Comercio 23/10/03). A propósito de la visita del secretario de la ONU, Kofi Annan, se firmó un convenio que ratifica la participación de militares ecuatorianos en el grupo de Cascos Azules de la ONU (Hoy 12/11/03).

## RELACIÓN PRESIDENTE - FFAA

- Un encuentro entre el Alto Mando Militar y el Presidente se dio luego de la denuncia de supuesto vínculo de militantes de Sociedad Patriótica (partido de gobierno) y César Fernández, acusado de narcotráfico. Un vocero del Ministerio de Defensa, dijo que la reunión estaba planificada hace más de un mes (Hoy 21/11/03). Las FFAA presentaron y evaluaron los planes de seguridad interna y externa del país, señaló (El Comercio 21/11/03). Los análisis que hace la institución militar salen del CAPE (Centro de Análisis Político y Estratégico del Ejército), "la crisis actual y los logros forman parte del análisis de la política de seguridad interna". La reunión fue vista como "una demostración de que las FFAA siguen a disposición del Presidente" (El Comercio 22/11/03). Octavio Romero, Jefe del Comando Conjunto manifestó que la institución armada respeta la Constitución y respalda al primer mandatario, su comandante en jefe (Hoy 27/11/03).

## OPINION PÚBLICA

¿Estaría usted de acuerdo en que la Corte Suprema de Justicia, por medio de una sala especializada, controle la legalidad de los fallos que dicte la Corte Suprema de Justicia Militar?

**CUADRO N° 1**

	TOTAL	Provincia		Sexo		N.S.E.			Edad				
		Guayas	Pichincha	M	F	A/B	C	D	18 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	+ de 55
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>SI</b>	<b>63.75</b>	52.68	75.38	67.12	59.55	70.37	68.80	60.48	66.29	62.00	62.12	63.38	64.86
<b>NO</b>	<b>22.50</b>	25.85	18.97	23.42	21.35	22.22	22.40	22.58	19.10	22.00	24.24	23.94	24.32
<b>No sabe / no contesta</b>	<b>13.75</b>	21.46	5.64	9.46	19.10	7.41	8.80	16.94	14.61	16.00	13.64	12.68	10.81

Estaría usted de acuerdo con que los jueces que juzgan a los militares sean profesionales del derecho y no militares de carrera?

**CUADRO N° 2**

	TOTAL	Provincia		Sexo		N.S.E.			Edad				
		Guayas	Pichincha	M	F	A/B	C	D	18 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	+ de 55
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>SI</b>	<b>91,77</b>	95,18	88,35	91,16	92,37	86,49	91,72	92,41	87,96	92,56	96,33	92,05	88,89
<b>NO</b>	<b>8,23</b>	4,82	11,65	8,84	7,63	13,51	8,28	7,59	12,04	7,44	3,67	7,95	11,11
<b>No sabe / no contesta</b>	<b>8,75</b>	15,61	1,54	4,05	14,61	7,41	6,40	10,08	7,87	12,00	9,09	7,04	6,76

Market: Investigación realizada durante los días 17 y 18 de enero de 2004

Muestra: 640 entrevistas (Pichincha y Guayas)

Confianza: 95%

Margen de error: + / - 2.8%

### BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD, DEFENSA

#### Comité Editorial

Bertha García Gallegos  
Fernando Bustamante Ponce  
Francisco Rhon Dávila

#### Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman – American University (USA)  
Dr. Gustavo Suárez Perterra – Instituto Gutiérrez Mellado (España)

#### Investigación

José Castro Sotomayor

#### Relaciones Públicas

Inés Cevallos Breilh

### BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD, DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria  
Universidad Católica. Torre 2, piso 9. Oficina 901  
Teléfonos: (593-2) 299 1582  
(503-2) 256 5627 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec  
<http://www.dsdpuce.org>

Correspondencia y solicitud de ejemplares  
del boletín:  
[jrcastro@puce.edu.ec](mailto:jrcastro@puce.edu.ec)